

REVISTA DE DERECHO

AÑO XX JULIO - SEPTIEMBRE DE 1952 N.º 81

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

COMITE DIRECTIVO:

ROLANDO MERINO REYES
ALEJANDRO VARELA SANTA MARIA
JUAN BIANCHI BIANCHI
VICTOR VILLAVICENCIO G.
QUINTILIANO MONSALVE JARA
MARIO CERDA MEDINA



ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA - CONCEPCION (CHILE)

VÍCTOR VILLAVICENCIO G.

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

(Continuación)

42.—A los descendientes legítimos.—Todas las legislaciones sin excepción consagran el principio de que se deben alimentos recíprocos entre descendientes y ascendientes legítimos, y así lo establece también el N.º 2.º del artículo 321 de nuestro Código Civil.

Con arreglo al artículo 324 estos alimentos son congruos y, de conformidad con el artículo 222 del mismo cuerpo de leyes, dicha obligación alimenticia y, en general, el deber de socorro, cuidado personal, crianza y educación de los hijos pesa, en primer lugar, sobre sus padres legítimos en conjunto, o sobre aquel que sobreviva al fallecimiento del otro, según se desprende del artículo 229.

Al igual que el deber de socorro entre cónyuges, esta obligación de velar por el cuidado personal, crianza y educación de los hijos presenta también un doble aspecto, material y espiritual, al primero de los cuales corresponde el derecho de alimentos que estamos estudiando.

Si los padres viven en el régimen de sociedad conyugal, los gastos correspondientes son de cargo de ésta, sin recompensa, de acuerdo con los artículos 228 y 1740 N.º 5.º del Código Civil, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el artículo 1744 respecto de los gastos de educación y establecimiento de los descendientes comunes. Esta misma regla general se aplica incluso a

los alimentos debidos a los descendientes de uno sólo de los cónyuges, los que también se consideran una carga de la familia y pesan sobre la sociedad conyugal, sin perjuicio de la facultad del juez para limitar la parte que ésta debe soportar y para imputar el exceso al cónyuge alimentante, de acuerdo con el inciso 2.º del N.º 5.º del artículo 1740 en estudio.

Estas normas se aplican igualmente en el caso de separación parcial de bienes, en que la sociedad conyugal subsiste, pero no rigen en el caso de separación total, en que el legislador ha dado reglas especiales.

En efecto, de acuerdo con el artículo 160 del Código Civil, la separación total de bienes impone a ambos cónyuges la obligación de concurrir a los gastos de los descendientes legítimos y de la familia común, en la proporción fijada de común acuerdo, o por resolución judicial, en caso de desacuerdo. En el hecho, los pagos debe hacerlos íntegramente el marido y la mujer debe entregar a éste su aporte o contribución, según se desprende del inciso 2.º del artículo 228 recientemente citado.

Con respecto a los alimentos de los descendientes que no son comunes, como no cabe aplicar el artículo 160, es evidente que cada uno de los cónyuges soporta el pago de los alimentos a que está obligado, pues el caso especial del inciso 2.º del número 5.º del artículo 1740 sólo puede aplicarse cuando hay sociedad conyugal.

Tampoco pueden aplicarse las normas estudiadas cuando el descendiente legítimo tiene bienes propios, pues, en tal hipótesis, de acuerdo con los incisos 3.º del artículo 228 y final del artículo 1744, los gastos de establecimiento y, en caso necesario, los de su crianza y educación, deberán sacarse de sus bienes propios. Nótese que el precepto emplea la expresión "de su crianza y educación", para dar a entender claramente que, si son varios los hijos, los gastos causados por uno de ellos no pueden afectar los bienes propios de los otros. Estos preceptos no son sino una aplicación del principio de que el derecho de alimentos se regula por la situación económica del alimentante y la necesidad del alimentario.

El artículo 41 del Código Civil Soviético establece que "los padres han de cuidar de los hijos menores de edad, y en particular

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

417

de su educación y preparación para actividades socialmente útiles”.

Precisando lo que debe entenderse por “gastos de establecimiento”, nuestros tribunales han estimado que la compra de ropas, galas, vituallas y demás especies destinadas a la ceremonia del matrimonio del hijo menor, no son gastos de establecimiento y quedan comprendidos dentro del derecho de alimentos. En consecuencia, la demanda del hijo, en que solicita de su padre una asignación alimenticia extraordinaria para cubrir tales gastos, es de la competencia de los Tribunales de Menores (42).

A falta de los padres legítimos del alimentario, esta obligación pasa a los abuelos por línea paterna y materna, conjuntamente, según se desprende del artículo 231 del Código Civil, pero ella no es solidaria sino simplemente conjunta y su monto no se divide por partes iguales entre los obligados, sino en proporción a las facultades económicas de unos y otros.

A este respecto, nuestra jurisprudencia ha declarado que la obligación que pesa sobre varios ascendientes legítimos del alimentario es simplemente conjunta y, en consecuencia, si fallece uno los varios abuelos, los sobrevivientes sólo responden de su parte o cuota y no del total (43).

Pese a que el artículo 231 habla sólo de abuelos, debe entenderse que la obligación en estudio afecta sin limitación a todos los ascendientes, ya que, en el caso inverso, el artículo 221 concede el derecho de alimentos no sólo a los padres y abuelos, sino en general a todos los ascendientes legítimos (44).

Se ha criticado este número 2.º del artículo 231 porque limita el derecho de alimentos a los descendientes legítimos, excluyendo a la descendencia ilegítima del alimentante que, en la mayor parte de los casos, sufre mayores necesidades económicas que la des-

(42) Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XLVIII, Sección Segunda. Página 79.

(43) Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XXV. Sección Primera. Página 264.

(44) CLARO YAVAR, Guillermo. Obra citada, página 32. Párrafo 35.

endencia legítima. Este vacío, explicable sólo por el criterio imperante en la época en que se redactó y promulgó el Código Civil, ha sido parcialmente superado por las leyes N.º 5.750, de 2 de Diciembre de 1935, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y N.º 10.271, de 2 de Junio del presente año, que han reglamentado el derecho de alimentos de los hijos naturales e ilegítimos y han abierto las puertas a la investigación de la paternidad extramatrimonial.

Si bien el número 2.º del artículo 321 o deja muchas dudas acerca de que comprende a los descendientes legítimos en toda la línea recta por consanguinidad, no puede sostenerse lo mismo con respecto a la línea recta por afinidad. Su redacción, amplia e imprecisa, plantea el problema de si la ley ha establecido el derecho de alimentos recíprocos entre suegros y yerno o nuera. Relacionando este precepto con el inciso 2.º del número 5.º del artículo 1740 del Código Civil, parece llegarse a la conclusión afirmativa. En efecto, este último artículo reconoce como carga de familia imputable a la sociedad conyugal "los alimentos que uno de los cónyuges esté por ley obligado a dar a sus... ascendientes, aunque no lo sean de ambos cónyuges", o, en otras palabras, los alimentos en favor de los padres o abuelos de uno de los cónyuges. Es evidente que si dicho gasto lo debe soportar la sociedad conyugal sin derecho a recompensa, es porque el legislador ha querido imponer a cada cónyuge la obligación de concurrir en el pago de los alimentos a que tienen derecho los ascendientes legítimos del otro cónyuge.

El Código Civil Francés, en su artículo 206, reconoce el derecho de alimentos en favor de los descendientes legítimos por afinidad en primer grado, pero lo hace cesar cuando el cónyuge que produce la afinidad y los hijos de ese matrimonio han fallecido. Análoga disposición se contiene en el Código Civil Argentino, a diferencia de lo que ocurre en los Códigos Español, Suizo y Alemán, que no conceden alimentos a los parientes por afinidad. El artículo 42 del Código Civil Soviético establece que la obligación de alimentar a los hijos menores o incapacitados para el trabajo pesa también sobre el padrastro o madrastra, en los siguientes casos: a) Si los padres han muerto; b) si carecen de lo necesario para mantener a sus hijos.

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

419

Con respecto a los colaterales, no caben en el número 2.º del artículo 321, que se refiere sólo a los descendientes legítimos, sobre todo en presencia del artículo 27 del mismo Código Civil, que, al definir la línea colateral, dice que es aquella que une a dos parientes que proceden de un tronco común, pero en que ninguno es ascendiente o descendiente del otro. Sólo el número 8.º del artículo 321 establece el derecho de alimentos en favor de los hermanos legítimos.

Finalmente, cabe recordar que el artículo 232 impone a los padres legítimos la obligación de reembolsar a los terceros los alimentos que éstos hayan proporcionado al hijo, cuando, hallándose ausente de la casa paterna y sin poder ser asistido por aquéllos, se encontró en urgente necesidad. Por regla general, esa responsabilidad se extiende a los alimentos congruos proporcionados al hijo, salvo que éste fuere de notoria mala conducta o hubiere motivo para creer que anda ausente sin el consentimiento de sus padres, en cuyo caso la responsabilidad de éstos se limita a las suministraciones "absolutamente necesarias para la física subsistencia personal del hijo".

Tratándose de hijos abandonados por sus padres; y criados y alimentados por otras personas, el artículo 239 permite a estas últimas conservarlos en su poder mientras que no les sean reembolsados los gastos de crianza y educación tasados por el juez, lo que constituye un extraño derecho legal de retención.

Todo lo expuesto en favor de los hijos legítimos, en materia de alimentos, cuidado personal, crianza, educación y establecimiento, rige también para el adoptado, de acuerdo con los artículos 19 y 22 de la Ley N.º 7.613, de 21 de Octubre de 1943, sobre Adopción. En virtud del primero de ellos, dentro de la sociedad conyugal, el adoptado es considerado como descendiente común de ambos cónyuges, para los efectos de los artículos 228, 1740 N.º 5 y 1744 que ya hemos estudiado. De conformidad con el artículo 22 de la misma Ley de Adopción, la obligación alimenticia entre adoptante y adoptado es recíproca y se rige por el título XVIII del Libro I del Código Civil, especialmente por los números 2.º y 3.º del artículo 321, lo que significa que dichos alimentos son congruos, en virtud de la referencia que a ambos números hace el artículo 324 del mismo cuerpo legal.

43.—A los ascendientes legítimos.—Al igual de lo que ocurre con los cónyuges y con los descendientes legítimos, nuestros legislador ha establecido también en favor de los ascendientes legítimos una especie de deber de socorro y asistencia.

Así se desprende del artículo 219 del Código Civil, que impone a los hijos el deber de respeto y obediencia a sus padres, y del artículo 220, que los obliga a cuidarlos en su ancianidad o demencia y en todas las circunstancias de la vida en que necesiten de su auxilio.

Este deber es tan claro en nuestro Derecho, que su incumplimiento produce indignidad para suceder y constituye una causal de desheredamiento, de acuerdo con los artículos 968 N.º 3.º y 1208 N.º 2.º del Código tantas veces mencionado.

En el aspecto pecuniario, tal deber se manifiesta en la obligación de proporcionar alimentos congruos, consagrada por los artículos 321 N.º 3.º y 324 del citado cuerpo de leyes. Estos preceptos no hacen sino reconocer la reciprocidad del derecho de alimentos que concede a los descendientes legítimos el número 2.º del artículo 321.

El legislador no ha dicho si los alimentos deben limitarse a los ascendientes por consanguinidad o si también aprovechan a los que lo son por afinidad, y sobre ese problema nos remitimos a lo dicho en el párrafo precedente.

Los alimentos legales en favor de los ascendientes de cualquiera de los cónyuges constituyen una carga de familia y, dentro del régimen de la sociedad conyugal, su pago corresponde a ésta sin derecho de recompensa, de acuerdo con el número 5.º del artículo 1744; salvo que ellos parezcan excesivos, en cuyo caso, según se ha dicho, el juez puede limitar la responsabilidad de la sociedad conyugal e imputar el exceso al cónyuge respectivo.

44.—A los hijos naturales y a su posteridad legítima.—También ha creado nuestro legislador, en favor de los hijos naturales, una especie de deber de socorro y asistencia, al decir en el artículo 277 del Código Civil que "es obligado a cuidar personalmente de los hijos naturales el padre o madre que los haya reconocido, en los mismos términos que lo sería el padre o madre legítimo, según el artículo 222".

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

421

Por su parte, el artículo 279 dispone que los gastos de crianza y educación del hijo natural incumben al padre o madre que lo haya reconocido, en los mismos términos que respecto de los hijos legítimos, esto es, pudiendo deducirse de sus bienes propios, cuando los tenga, y cuidando en lo posible de no menoscabar los capitales productivos.

El inciso final de dicho artículo 279, hace aplicables a los hijos naturales los artículos 229 al 239 inclusive, en materia de cuidado personal, socorro, asistencia, crianza y educación, con la sola excepción del artículo 231. Esto significa que, a falta o insuficiencia de los padres naturales, tales obligaciones no pasan contra los ascendientes de estos últimos, lo que no es sino una nueva aplicación del viejo aforismo de que el hijo natural no tiene abuelos.

En la línea descendente la situación no es la misma, por lo menos en materia de alimentos, pues el artículo 321, en su número 4.º, concede este derecho tanto a los hijos naturales como a su posteridad legítima, es decir, el padre natural no sólo debe alimentos a su hijo natural, sino también a los descendientes legítimos de éste. Con respecto a los hijos naturales del hijo natural, esa obligación cesa como consecuencia del mismo aforismo anteriormente aludido.

En cuanto a la extensión de este derecho, el texto primitivo del artículo 324 lo limitaba a lo estrictamente necesario para la subsistencia, o sea, lo reducía a alimentos necesarios; pero la Ley N.º 10,271, de reciente dictación, lo ha elevado a los alimentos congruos al decir, en su nueva redacción, que se debe esta clase de alimentos a las personas designadas "en los cuatro primeros y en el último" de los números del artículo 321. Como consecuencia de esta misma reforma, los alimentos congruos de que gozaban los hermanos legítimos han sido reducidos a necesarios.

Bajo la sola vigencia del Código Civil, la calidad de hijo natural sólo podía adquirirse en virtud de un reconocimiento voluntario, espontáneo, solemne y expreso del padre o madre, manifestado por instrumento público o por acto testamentario. Aún más, dicho reconocimiento debía ser hecho formalmente con ese determinado objeto, según establecía el artículo 1169, lo que significaba, según la doctrina más generalmente aceptada, que en nuestro

Derecho el reconocimiento era constitutivo o atributivo de filiación natural y no meramente declarativo (45).

Consecuencias de este carácter eran, que la única fuente del estado civil de hijo natural la constituía la voluntad expresa y solemne del padre o madre, y su única prueba el correspondiente testamento o instrumento público, de acuerdo con los artículos 271 y 305 inciso 2.º del Código Civil.

La Ley N.º 10.271, tantas veces citada, ha modificado sustancialmente esta materia y, conservando el reconocimiento solemne y voluntario, ha agregado varios otros medios por los cuales puede adquirirse el estado civil de hijo natural.

Estudiaremos brevemente cada uno de estos casos, que el artículo 271 ha establecido en los términos siguientes:

Son hijos naturales:

45.— 1.º) Los que el padre, la madre o ambos hubieren reconocido como suyos mediante una declaración formulada con ese determinado objeto en escritura pública, en la inscripción de nacimiento del hijo o en acto testamentario.—Este primer inciso, al introducir la frase "con ese determinado objeto", parece dar a entender que el reconocimiento de hijo natural contemplado en él tiene carácter atributivo y no meramente declarativo, es decir, parece exigir que el reconocimiento se haga con el objeto y la intención de conferir al hijo la calidad y los derechos de hijo natural.

Esta impresión se afirma aún más en presencia del inciso segundo, que parece contemplar el reconocimiento puramente declarativo, al decir literalmente:

"Con todo, el hecho de consignarse el nombre del padre o de la madre, a petición de ellos, en la inscripción de nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación natural".

Sin embargo, un análisis más profundo de los incisos primero y segundo del artículo 271 en estudio, nos lleva a la conclusión

(45) ASSAEL MORRIS. La reforma del Código Civil. Página 57, párrafo 36. Editorial Jurídica. 1952.

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

423

de que las formas de reconocimiento que ambos preceptos contemplan son puramente declarativas. En efecto, no es menester que la declaración formulada en escritura pública, en acto testamentario o en la inscripción de nacimiento del hijo sea hecha "con el determinado objeto de conferirle la calidad y los derechos de hijo natural". Basta que ella sea efectuada con el determinado objeto de reconocerlo como hijo, para que la ley atribuya a dicha declaración el efecto de conferir el estado civil de hijo natural, aun cuando el padre o madre no haya tenido tal propósito o haya deseado conferirle solamente derecho de alimentos como hijo ilegítimo.

Es interesante recordar que en el Proyecto del Instituto Chileno de Estudios Legislativos, se facultaba a los padres para otorgar el reconocimiento con posterioridad a la inscripción de nacimiento, mediante la simple anotación marginal del nombre, practicada a petición del padre o de la madre; pero el Senado suprimió el inciso correspondiente, eliminando tan útil y sencillo medio de reconocimiento.

En concordancia con las reformas que estamos estudiando, la Ley N.º 10.271 modificó el artículo 32 de la Ley N.º 4.808 sobre Registro Civil y dispuso, en su nuevo texto: "En la inscripción del nacimiento podrán el padre, la madre o ambos, reconocer al hijo como suyo. El Oficial del Registro Civil deberá dejar testimonio en la inscripción del nacimiento de las declaraciones que los padres o sus representantes formulen en conformidad al número 1.º del artículo 271 del Código Civil, certificar la identidad y exigirle que estampe su firma o, si no pudiere firmar, su impresión digital".

Por último, la reforma estableció que el reconocimiento por acto entre vivos podría hacerse personalmente o por medio de mandatario especial constituido por escritura pública; no así el reconocimiento testamentario, que siempre debe ser hecho personalmente, en virtud de que la facultad de testar es indelegable, de acuerdo con el artículo 1004 del Código Civil.

Este reconocimiento solemne, otorgado por instrumento público, por testamento o en la inscripción de nacimiento del hijo, no constituye una originalidad de nuestra legislación. Los artículos 334 del Código Civil Francés, 131 del Código Civil Español,

303 del Código Suizo, 354 del Código Peruano y 357 del Código Brasileiro lo tienen ya establecido en forma análoga.

En cuanto al reconocimiento por acto testamentario, los artículos 366 y 367 del Código Civil Argentino establecen que él es esencialmente revocable. En nuestro país, este problema ha sido muy discutido y la jurisprudencia chilena ha sido vacilante. Sin embargo, parece que la doctrina dominante de nuestros tribunales tiende a establecer que el reconocimiento de hijo natural otorgado en acto testamentario es irrevocable y queda en pie aun cuando el testamento sea revocado.

46.—2.º) Aquellos que hubieren obtenido el reconocimiento de la paternidad o maternidad natural por sentencia judicial.—La nueva ley ha venido a modificar el sistema preexistente, en cuanto limitaba la investigación de la paternidad natural y sólo admitía, con reservas, la investigación de la maternidad. En el nuevo texto, la investigación de ambos hechos constitutivos de filiación se equipara y admite en forma amplia.

Sin embargo, el inciso segundo adopta ciertas precauciones tendientes a asegurar la seriedad de los juicios, al exigir que la demanda se funde necesariamente en un instrumento público o privado, emanado del supuesto padre o madre, que contenga una confesión manifiesta de paternidad o maternidad. Este documento debe acompañarse conjuntamente con la demanda, para que ésta pueda ser proveída, con lo cual se introducen modificaciones a las reglas generales en cuanto a la oportunidad en que es posible presentar en juicio la prueba documental.

Refiriéndose a este reconocimiento judicial, el artículo 272 establece que la demanda debe someterse al procedimiento ordinario y no puede dirigirse contra una persona casada no divorciada perpetuamente, a menos que se demande al mismo tiempo a su marido o mujer. Además, el reconocimiento sólo se produce en juicio seguido contra legítimo contradictor y siempre que la demanda, por lo menos, haya sido notificada en vida del supuesto padre o madre. En este aspecto, la reforma concuerda con los artículos 315 y 316 del Código Civil en cuanto a los requisitos que debe reunir la sentencia judicial que declara verdadera o falsa la legitimidad del hijo, para que produzca efectos absolutos.

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

425

La determinación del legítimo contradictor, en esta materia, se ajusta a las reglas generales de los artículos 317 y 318 del Código Civil, aplicables por expresa disposición del inciso segundo del nuevo artículo 272.

Es interesante hacer notar que, en la reforma, no es causal suficiente para impugnar la paternidad natural el hecho de que la madre haya cohabitado con otro individuo durante el período en que, según la presunción del artículo 76 del Código Civil, fué posible la concepción. Este problema, tan debatido en la doctrina moderna, ha sido resuelto en el sentido más favorable para el hijo. Naturalmente que si el supuesto padre demandado exhibe otros antecedentes para enervar la demanda, podrá invocar además la cohabitación de la madre con un tercero en el período de la concepción, pues lo que la ley impide es que se alegue como defensa "esa sola circunstancia".

47.—3.º) Los que hubieren poseído notoriamente, a lo menos durante quince años consecutivos, la calidad de hijo respecto de determinada persona.—Bajo la sola vigencia del Código Civil, la calidad de hijo natural sólo podía probarse mediante el correspondiente testamento o instrumento público, a diferencia de lo que ocurría con el matrimonio o con el estado civil de hijo legítimo, que podían acreditarse supletoriamente hasta con la posesión notoria.

El nuevo artículo 271 ha admitido la posesión notoria como medio de prueba de la calidad de hijo natural, siempre que ella reúna determinados requisitos. Su inciso segundo establece que "la posesión de dicha calidad consiste en que su padre o madre le haya tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente y presentándole en ese carácter a sus deudos y amigos, y que éstos y el vecindario de su domicilio en general, le hayan reputado y reconocido como tal".

El precepto es sustancialmente igual al artículo 311 del Código Civil, que define la posesión notoria del estado civil de hijo legítimo, y contiene los clásicos requisitos romanos de nomen, tractus et fama.

En cuanto a su duración, el Proyecto contemplaba un plazo de 10 años, en concordancia con el artículo 312, pero en la di-

cusión legislativa dicho plazo se amplió a 15 años, sin una razón atendible, a nuestro modo de ver.

Finalmente, tratándose de la prueba de la posesión notoria, el inciso tercero del número 3.º del artículo 271, dice que ella deberá acreditarse "por un conjunto de testimonios fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable", lo que también coincide con la parte primera del artículo 313 del Código Civil. Agrega, que "la prueba de testigos no bastará por sí sola para acreditarla", precaución ampliamente justificada.

Hay, sin embargo, una aparente contradicción en este inciso, pues mientras la parte final excluye la testimonial como único medio de prueba, la parte primera establece que la prueba consistirá "en un conjunto de testimonios fidedignos", lo que en lenguaje natural y obvio equivale a la declaración conteste de dos o más testigos abonados. Habría sido preferible, para la claridad del precepto, emplear un lenguaje equivalente al del número 1.º del nuevo artículo 280 y decir que la posesión notoria se probará "por un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos".

Con respecto a la posesión notoria, la reforma nos parece de gran utilidad aunque no exenta de algunos riesgos, que era inevitable correr. En nuestras costumbres, especialmente en las clases modestas y en los sectores rurales, es frecuente que los padres entreguen en crianza sus hijos a otras familias. Los "dan a criar", como se expresa en términos vulgares. Se produce en tales casos y respecto de estos hijos ajenos, una especie de adopción de hecho, que determina que esos allegados vivan y sean mantenidos, tratados y alimentados exactamente como hijos verdaderos, durante 15 años o más. Incluso la ignorancia de las gentes llega hasta hacerlos inscribir como legítimos y anotarlos en la libreta de familia. En tales condiciones, cualquiera de estos hijos ajenos podrá invocar la posesión notoria de hijo natural y reclamar alimentos y derechos hereditarios respecto de las personas que los han recogido, criado y alimentado, adquiriendo un estado civil falso.

48.—4.º) Los que hubieren obtenido declaración de maternidad fundada en la circunstancia precisa de haberse establecido, con testimonios fidedignos, el hecho del parto y la identidad del

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

427

hijo.—La maternidad, a diferencia de lo que ocurre con la paternidad, se manifiesta por fenómenos externos, notorios, visibles y fácilmente comprobables.

Por eso es que los legisladores han admitido, casi sin excepción, la amplia investigación de la maternidad ilegítima, y de los dos hechos que la constituyen: el parto y la identidad de su producto. En cuanto al primero, resulta en la actualidad sumamente fácil establecerlo o constatarlo aún después de muchos años, mediante certificados de médicos y matronas, exámenes radiológicos y demás métodos científicos. Con respecto a la identidad del hijo, tampoco ella resulta difícil de establecer, gracias a la generalización de los sistemas de identificación plantar, digital e incluso de las papilas palatinas, aparte de los medios ordinarios de prueba.

Como este inciso habla simplemente de "testimonios fidedignos", lo que es sinónimo de declaración de dos o más testigos abonados, es decir, contestes en los hechos y en sus circunstancias esenciales, que den razón de sus dichos, legalmente examinados y hábiles para testificar, y como la ley no lo limitó expresamente, a diferencia de lo que hizo con el número 3.º del artículo 271 en estudio, hay que llegar a la conclusión de que la sola prueba de testigos basta para acreditar el hecho del parto y la identidad del hijo.

49.—5.º) Aquellos que hayan sido reconocidos por el supuesto padre, cuando, citado éste por el hijo a la presencia judicial, confesare la paternidad bajo juramento.—Este reconocimiento, aparentemente forzado, pero voluntario en el fondo, equivale en parte al reconocimiento de hijo ilegítimo que contemplaba el número 5.º del artículo 280 antes de la reforma de la Ley N.º 10.271.

En efecto, dicha disposición atribuía unas mismas consecuencias al reconocimiento expreso dado por el padre ante el juez y a su no comparecencia injustificada y reiterada ante el Tribunal, luego de ser citado por dos veces con expresión del objeto de la citación. En ambos casos, el supuesto hijo sólo adquiriría derecho a alimentos necesarios en calidad de hijo simplemente ilegítimo.

Los legisladores de la reforma dividieron el primitivo precepto y atribuyeron consecuencias distintas a las dos situaciones en

que puede hallarse el supuesto padre citado a la presencia judicial, a saber: Si comparece y reconoce voluntariamente al hijo, este reconocimiento confiere la calidad de hijo natural, pues ha sido prescrito en forma solemne y ante tribunal competente, es decir, equivale casi al reconocimiento del número 1.º del artículo 271. En cambio, si el padre deja de concurrir ante el Tribunal sin causa justificada, después de dos citaciones en que se le ha expresado el objeto de la comparecencia, su rebeldía genera en su contra obligación de proporcionar alimentos al supuesto hijo, pero no puede llegar hasta conferir a éste la calidad de hijo natural. Al dividirse el antiguo número 5.º del artículo 280, su primera parte ha dado lugar al número 5.º del nuevo artículo 271 y su segunda parte ha quedado incorporada en el número 4.º del actual artículo 280.

50.—¿Qué clase de alimentos corresponden a los hijos naturales?—En el texto primitivo del artículo 324 del Código Civil, los hijos naturales sólo tenían derecho a alimentos necesarios, o sea, los indispensables para sustentar la vida. Ese precepto concedía alimentos congruos en los casos de los tres primeros y los dos últimos números del artículo 321, es decir, entre cónyuges, ascendientes y descendientes legítimos, hermanos legítimos y en favor del donante.

La Ley N.º 10.271 modificó el artículo 324 y concedió tal clase de alimentos en los casos de los cuatro primeros y del último número del artículo 321. En otros términos, elevó a congruos los alimentos de los hijos naturales y rebajó a necesarios los de los hermanos legítimos.

Siempre en materia de filiación natural, la reforma suprimió el trámite de la aceptación del reconocimiento y estableció que éste produce efectos desde su otorgamiento, por el solo ministerio de la ley y sin necesidad de aceptación previa; sin perjuicio del derecho que le confiere al supuesto hijo para repudiar el reconocimiento en la forma y el plazo que la misma ley señala.

En su oportunidad veremos que la ley ha mejorado también, en grado apreciable, la situación de los hijos naturales en materia sucesoria.

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

429

51.—A la posteridad legítima del hijo natural.—Todo lo que hemos dicho con respecto a los hijos naturales, en materia de alimentos, se extiende a los descendientes legítimos de aquéllos, sin limitación del grado de parentesco.

Lo mismo ocurre con respecto a la cuarta de mejoras que, en virtud de la reforma de la Ley N.º 10.271, puede asignarse por el causante a los descendientes legítimos de sus hijos naturales.

Ambas instituciones hacen excepción al principio de que la filiación natural es de efectos limitados entre el padre y el hijo, que no pasan hacia los ascendientes de aquél ni a los descendientes de éste.

Resulta obvio expresar que los descendientes legítimos del hijo natural, por hallarse comprendidos en el número 4.º del artículo 321, tienen también derecho a alimentos congruos, que los habiliten para subsistir de un modo correspondiente a su situación social.

52.—A los padres naturales.—De acuerdo con el número 5.º del artículo 321 del Código Civil, que no fué modificado por la Ley N.º 10.271, tienen también derecho a alimentos los padres naturales.

Bajo la sola vigencia del Código Civil, en que el reconocimiento era espontáneo y voluntario del padre o madre, este precepto no daba lugar a cuestión alguna y constituía un acto de justicia conceder alimentos a quien, en forma voluntaria y siguiendo el impulso de un noble sentimiento, había conferido la calidad de hijo natural a un hijo simplemente ilegítimo.

No ocurre lo mismo en la actualidad, en que la filiación natural puede producirse en virtud de una sentencia judicial, sin el consentimiento o aún contra la voluntad del padre o madre natural.

Cuando el reconocimiento ha sido hecho voluntariamente, en las formas del número 1.º y aún del número 5.º del artículo 271, resulta de indudable justicia conceder derecho de alimentos al padre natural. Pero cuando este reconocimiento ha sido alcanzado en virtud de una sentencia judicial, dictada contra legítimo contradictor, y al cabo de un litigio provocado por el padre o madre con su resistencia u omisión en el otorgamiento del reconocimiento vo-

luntario —como ocurre en los casos de los números 2.º, 3.º y 4.º del artículo 271—, nos nos parece justo, equitativo ni útil conceder al padre natural el mismo derecho de alimentos.

Habría sido más acertado, a nuestro modo de ver, que la Ley N.º 10.271 hubiera hecho, en materia de alimentos de los padres naturales, la misma discriminación que hizo en el artículo 108, en lo tocante al consentimiento para el matrimonio del hijo natural; en el artículo 359 con respecto a los derechos del padre o madre natural para nombrar a su hijo guardador testamentario; en el artículo 368 en lo relativo al llamamiento del padre o madre natural al ejercicio de su guarda legítima; en el artículo 993 al reglamentar los derechos hereditarios de los padres naturales en la sucesión irregular del hijo natural, etc. En todos estos preceptos la Ley N.º 10.271 adoptó el criterio de conferir derechos a los padres naturales sólo en el caso de reconocimiento voluntario de los números 1.º y 5.º del artículo 271, y de negárselos en los casos de los números 2.º, 3.º y 4.º. En cambio, en materia de alimentos, el artículo 321 N.º 5.º concedió alimentos necesarios a los padres naturales, cualquiera que fuere el origen del reconocimiento y aun cuando éste fuere ajeno o contrario a la voluntad del padre o madre, con lo cual se malogró un medio de estimularlos a otorgar el reconocimiento voluntario, evitando pleitos engorrosos e innecesarios. Este criterio se justifica aún menos, si se tiene en cuenta que el propósito dominante de los autores de la Ley N.º 10.271 fué el de ir paulatinamente a la generalización del estado civil de hijo natural, en la filiación extramatrimonial, y a la eliminación de la calidad de hijo ilegítimo de nuestra organización familiar.

El profesor señor Alessandri justificó el pensamiento de los legisladores de la reforma, por el carácter estrictamente indispensable para sustentar la vida que tienen los alimentos necesarios. Incluso esto pudo conciliarse, concediendo a los padres naturales, alimentos congruos en los casos de reconocimiento voluntario de los números 1.º y 5.º del artículo 271, y alimentos necesarios en los casos de los números 2.º, 3.º y 4.º del mismo artículo.

(Continuará)